

Departamento de Seguridad Nacional: Descripción general y Contexto del derecho de inmigración

Generado por: Asistente Legal de
IA. Facilitado por: Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc.

2 de febrero de 2026

© 2026 Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Generado por un Asistente Legal de IA. Con la colaboración del Bufete de Abogados de Fernando Hidalgo, Inc. Todos los derechos reservados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL: INTEGRAL PANORAMA GENERAL Y CONTEXTO DE LA LEY DE INMIGRACIÓN

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es la agencia del poder ejecutivo federal a nivel de gabinete responsable de proteger a los Estados Unidos contra posibles amenazas que van desde el terrorismo y el crimen transnacional hasta los desastres naturales y los ciberataques[2][6][43]. Con más de 240 000 empleados distribuidos en nueve componentes operativos y numerosas direcciones de apoyo, el DHS representa el tercer departamento del gabinete más grande de los Estados Unidos, solo por detrás del Departamento de Defensa y el Departamento de Asuntos de Veteranos[2][6][43]. Establecido mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2002, que el presidente George W. Bush promulgó el 25 de noviembre de 2002, el DHS comenzó a operar plenamente el 1 de marzo de 2003, consolidando lo que anteriormente habían sido 22 agencias y funciones federales dispares en una sola organización unificada[2][6][55]. Para los profesionales de inmigración en el norte de California y en todo el país, el DHS representa la principal estructura federal a través de la cual se llevan a cabo la seguridad fronteriza, la aplicación de las leyes de inmigración y la adjudicación de beneficios de inmigración, por lo que una comprensión integral de su misión organizacional, componentes y prioridades operativas es esencial para la representación legal.

Contexto histórico y establecimiento del DHS

La creación del Departamento de Seguridad Nacional marcó una respuesta directa a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que alteraron fundamentalmente los enfoques estadounidenses sobre la seguridad nacional y la protección interna[2][6][9]. Inmediatamente después de esos ataques, el presidente George W. Bush anunció la creación de la Oficina de Seguridad Nacional en octubre de 2001, con el exgobernador de Pensilvania, Tom Ridge, asumiendo el cargo de Asistente del Presidente para la Seguridad Nacional[2][6]. Sin embargo, esta oficina interina resultó insuficiente para coordinar la fragmentada respuesta federal a las amenazas a la seguridad, ya que numerosas agencias de múltiples departamentos del Gabinete mantenían responsabilidades superpuestas en materia de seguridad fronteriza, control de inmigración, seguridad del transporte, análisis de inteligencia y gestión de emergencias[3][7].

La reorganización gubernamental que siguió representó, en palabras de la propuesta original al Congreso, la transformación más significativa del gobierno de los Estados Unidos en más de cincuenta años desde la creación del Departamento de Defensa[3][10]. El Congreso finalmente aprobó la Ley de Seguridad Nacional de 2002, creando un marco legal integral para el nuevo departamento, y el presidente Bush firmó esta legislación el 25 de noviembre de 2002[2][6][55].

La misión estatutaria establecida por la Ley de Seguridad Nacional abarca siete objetivos principales[55]. Primero, el DHS debe prevenir ataques terroristas dentro de los Estados Unidos mediante la recopilación de inteligencia, el análisis de amenazas y las medidas de protección[55]. Segundo, el departamento debe reducir la vulnerabilidad de los Estados Unidos al terrorismo identificando y abordando las debilidades de la infraestructura crítica y coordinando los preparativos defensivos[55]. Tercero, el DHS debe minimizar los daños de los ataques terroristas que ocurran y ayudar en las operaciones de recuperación[55]. Cuarto, el departamento es responsable de ejecutar todas las funciones previamente asignadas a las 22 agencias federales que se transfirieron a su estructura[55]. Quinto, el DHS debe garantizar que las funciones no relacionadas con la seguridad nacional, como la respuesta a desastres naturales, las operaciones de rescate marítimo y otras misiones civiles, no se vean disminuidas ni descuidadas a pesar del enfoque de seguridad de la reorganización[55]. Sexto, la ley exige que las operaciones del DHS no socaven la seguridad económica general de los Estados Unidos[55]. Séptimo y último, el DHS debe monitorear las conexiones entre el tráfico ilegal de drogas y el terrorismo, coordinar los esfuerzos para interrumpir estas conexiones y contribuir a los esfuerzos más amplios de interdicción de drogas[55]. Este mandato multifacético revela que el DHS, a pesar de haber sido creado principa

La respuesta a las preocupaciones relacionadas con el terrorismo abarca una cartera considerablemente más amplia de misiones civiles y policiales que van mucho más allá de la lucha antiterrorista.

Estructura organizativa y componentes operativos

La arquitectura organizativa actual del DHS comprende nueve componentes operativos, múltiples componentes de apoyo y varias direcciones dentro de la Oficina del Secretario, cada una con misiones distintas pero complementarias dentro de la empresa más amplia de seguridad nacional[1][6][14][43]. Los componentes operativos, que ejecutan directamente las misiones centrales del DHS, incluyen nueve agencias[1]. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) representa la agencia civil de primera línea responsable de la seguridad fronteriza, con especial relevancia para la práctica del derecho migratorio[1][6][18]. La misión de la CBP abarca la protección de las fronteras del país contra la entrada ilegal, la actividad ilícita y las amenazas a la seguridad; el combate al crimen transnacional y al terrorismo que amenazan la seguridad económica y nacional; y la facilitación del comercio lícito y la entrada legal a los Estados Unidos[1][6][18].

Para los profesionales de inmigración del norte de California, la CBP mantiene una presencia operativa significativa en los puertos de entrada de San Ysidro y Otay Mesa en el sur de California, que son los puertos terrestres más transitados del país, así como en los principales aeropuertos de toda la región[18].

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) funciona como un componente operativo independiente centrado en investigaciones criminales y la aplicación de la ley de inmigración[13]. ICE lleva a cabo su doble misión a través de dos componentes principales: Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que se centra en desarticular el crimen transnacional; y Operaciones de Aplicación de la Ley y Expulsión (ERO), que se encarga de la aprehensión, detención y expulsión de personas que se encuentran ilegalmente en los Estados Unidos[13]. La Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA) de ICE proporciona orientación legal a todas las operaciones de ICE, mientras que la Oficina de Responsabilidad Profesional lleva a cabo investigaciones internas[13]. Los oficiales de ERO y los oficiales de deportación identifican, arrestan y procesan a los inmigrantes que violan la ley de inmigración de los Estados Unidos, y supervisan la detención de los inmigrantes bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de expulsión[13]. A partir de enero de 2025, los acuerdos 287(g), que permiten a las fuerzas del orden estatales y locales realizar ciertas funciones de control de la inmigración bajo capacitación y autorización federales, habían aumentado drásticamente de 135 acuerdos a 649 acuerdos a nivel nacional, aunque la participación de California ha permanecido limitada bajo las protecciones de la ley de valores del estado[13].

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) opera como el componente responsable de administrar el sistema de inmigración legal del país y proporcionar beneficios migratorios[35]. A diferencia de la CBP y el ICE, que se centran en la aplicación de la ley y la seguridad fronteriza, el USCIS maneja todas las solicitudes de beneficios migratorios, incluidas las peticiones basadas en la familia, los patrocinios basados en el empleo, las protecciones humanitarias como el asilo y la suspensión de la deportación, los documentos de autorización de trabajo (Documentos de Autorización de Empleo o EAD), los documentos de viaje, las solicitudes de naturalización y las solicitudes de ajuste de estatus[35]. El USCIS está compuesto por aproximadamente 19,000 empleados federales y contratistas que trabajan en 223 oficinas en todo el mundo, con una presencia significativa en el norte de California[35]. La Oficina de Asilo de San Francisco, ubicada en la región del norte de California, realiza entrevistas para solicitantes de asilo, casos de suspensión de deportación y casos de cancelación de expulsión de reglas especiales bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio para Centroamericanos (NACARA)[35]. USCIS mantiene una estructura de financiación única entre las agencias federales, con casi el 97,3% de su presupuesto derivado de las tarifas de usuario recaudadas a través de la Cuenta de Tarifas de Exámenes de Inmigración (IEFA) en lugar de asignaciones del Congreso[35].

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) es responsable de proteger los sistemas de transporte del país para garantizar la libertad de movimiento de personas y mercancías[19]. La TSA se creó en respuesta a los atentados del 11 de septiembre mediante la Ley de Seguridad de la Aviación y el Transporte de 2001, y se transfirió al DHS tras su creación en 2003[19]. Si bien la misión principal de la TSA se centra en la seguridad aeroportuaria,

y la prevención del secuestro de aeronaves, las responsabilidades de la agencia se han ampliado para abarcar la seguridad en carreteras, ferrocarriles, redes de autobuses, sistemas de transporte público, puertos, oleoductos e instalaciones de carga intermodal[19]. La TSA emplea aproximadamente a 47 000 agentes de seguridad del transporte (TSO, por sus siglas en inglés) que inspeccionan a los pasajeros y el equipaje en más de 450 aeropuertos de Estados Unidos[19]. La agencia también despliega inspectores de seguridad del transporte para evaluar la seguridad de los sistemas de transporte de pasajeros y carga, y opera agentes federales de seguridad aérea y oficiales federales de cabina de vuelo a bordo de las aeronaves[19].

La Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), una rama de las fuerzas armadas que se transfirió al DHS desde el Departamento de Transporte en 2003, mantiene la responsabilidad de la aplicación de la ley marítima y la seguridad, las operaciones de búsqueda y rescate, la protección del medio ambiente marino y el cumplimiento de las regulaciones pesqueras[29]. La Guardia Costera opera con casi 55 000 miembros militares y empleados civiles y mantiene la misión de hacer cumplir la ley e impedir que terroristas, criminales y narcotraficantes ingresen al país desde las costas de la nación[1]. A través de su misión de búsqueda y rescate (SAR), la Guardia Costera mantiene instalaciones SAR en las costas este, oeste y del Golfo, así como en Alaska, Hawái, Guam, Puerto Rico y en los Grandes Lagos y vías navegables interiores, y salva un promedio de más de 3500 vidas y más de 75 millones de dólares en bienes anualmente[29][32].

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que existió como agencia independiente desde 1979 antes de unirse al DHS en 2003, mantiene la responsabilidad de la prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante desastres naturales y provocados por el hombre[1][6][9][24]. La misión de FEMA abarca ayudar a las personas antes, durante y después de los desastres y coordinar la respuesta nacional a emergencias y eventos catastróficos[9]. La agencia ha experimentado importantes demandas operativas en los últimos años, particularmente en lo que respecta a la respuesta y recuperación ante desastres como huracanes, inundaciones, incendios forestales y otras emergencias relacionadas con el clima que afectan al norte de California y a todo el país[24].

Los Centros Federales de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (FLETC), establecidos en 1970 como el Centro Consolidado Federal de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley dentro del Departamento del Tesoro antes de ser transferidos al DHS en 2003, sirven como el mayor proveedor de capacitación para el cumplimiento de la ley en el país[37][40]. FLETC brinda capacitación de por vida a profesionales del cumplimiento de la ley de 105 agencias federales, además de ofrecer capacitación gratuita y de bajo costo a agencias estatales, locales, universitarias y tribales a través de su Instituto de Policía Rural[37][40]. La organización mantiene su sede principal en la antigua Estación Aeronaval Glynco cerca de Brunswick, Georgia, con centros de capacitación regionales adicionales ubicados en Artesia, Nuevo México; Charleston, Carolina del Sur; Cheltenham, Maryland; y otras ubicaciones en todo el país[40].

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) representa uno de los componentes de más rápida evolución del DHS[36][39]. CISA se estableció formalmente como una agencia independiente a través de la Ley de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de 2018, elevando lo que anteriormente había sido la Dirección Nacional de Protección y Programas (NPPD)[36]. Las responsabilidades de CISA abarcan la ciberseguridad y la protección de infraestructura en todos los niveles de gobierno, la coordinación de programas de ciberseguridad con los estados de los Estados Unidos y la mejora de las protecciones de ciberseguridad del gobierno contra actores cibernéticos del sector privado y de estados nación[36][39]. La agencia tiene su sede en Arlington, Virginia, y planea consolidar sus operaciones, incluyendo aproximadamente 6500 empleados, en un nuevo edificio de 10 pisos y 620 000 pies cuadrados en el campus consolidado de St. Elizabeths del DHS en Washington, DC[36].

Finalmente, el Servicio Secreto de los Estados Unidos (USSS), que se transfirió al DHS desde el Departamento del Tesoro en 2003, mantiene la doble misión de proteger a los líderes políticos estadounidenses e investigar delitos financieros[20]. El Servicio Secreto está autorizado por 18 USC § 3056(a) para proteger al Presidente, Vicepresidente, Presidente electo, Vicepresidente electo y sus familias inmediatas; expresidentes, sus cónyuges e hijos menores de 16 años; aquellos en la línea de sucesión presidencial; los principales candidatos a la presidencia y vicepresidencia y sus

cónyuges; y jefes de estado o de gobierno extranjeros visitantes[20]. La agencia opera oficiales de la División Uniformada que brindan protección al Complejo de la Casa Blanca, la residencia del Vicepresidente, el Edificio principal del Tesoro, las misiones diplomáticas extranjeras y las embajadas en el área de Washington, DC[20].

Más allá de estos nueve componentes operativos, el DHS mantiene varios componentes y direcciones de apoyo críticos. La Dirección de Gestión supervisa los servicios de apoyo administrativo de todo el departamento y gestiona la tecnología de la información, el presupuesto y la gestión financiera, las adquisiciones, el capital humano y las funciones de seguridad[41][42]. La Oficina de Inteligencia y Análisis (I&A) sirve como el brazo de inteligencia del DHS, difundiendo información oportuna a la dirección del DHS, socios operativos y socios estatales, locales, tribales, territoriales y del sector privado[2][6][42]. La Dirección de Ciencia y Tecnología funciona como el brazo de investigación y desarrollo del Departamento, operando seis laboratorios nacionales y gestionando el Instituto de Seguridad Nacional[49][58]. La Oficina de Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva (CWMD) coordina los esfuerzos del gobierno federal para prevenir el terrorismo químico, biológico, radiológico y nuclear (CBRN) dentro de los Estados Unidos[30][33]. La Oficina de Coordinación y Planificación de Operaciones proporciona conocimiento de la situación y apoyo a la toma de decisiones a la dirección del DHS y a los socios federales[1]. Además, el DHS mantiene una Oficina del Inspector General que proporciona supervisión independiente y promueve la excelencia, la integridad y la rendición de cuentas dentro del departamento[2][6].

Marco de la misión y objetivos principales del DHS

El Departamento de Seguridad Nacional opera de acuerdo con seis misiones centrales de seguridad nacional, tal como se describe en los documentos de planificación estratégica del DHS para los años fiscales 2023 a 2027[14][54]. Estas seis misiones, que proporcionan el marco general dentro del cual operan todos los componentes del DHS, abarcan áreas distintas pero interconectadas de responsabilidad federal. La primera misión se refiere a la lucha contra el terrorismo y las amenazas a la seguridad nacional, lo que requiere que el DHS permanezca vigilante contra todas las formas de terrorismo nacional e internacional a pesar del progreso significativo en la reducción de la amenaza terrorista para el país[54]. El DHS reconoce que los extremistas violentos de origen nacional —individuos inspirados por las ideologías de organizaciones terroristas extranjeras— representan la forma más prominente de terrorismo internacional que enfrenta actualmente el país[54]. Para combatir el terrorismo, el departamento tiene como objetivo mejorar la recopilación, el análisis y el intercambio de inteligencia e información procesables con socios locales e internacionales y adoptar tecnologías emergentes al tiempo que comprende cómo los terroristas pueden utilizar esas mismas tecnologías para amenazar la seguridad nacional[54].

La segunda misión, Asegurar y Gestionar Nuestras Fronteras, aborda lo que el DHS identifica como un aumento significativo de la migración irregular impulsada por la violencia, la inseguridad alimentaria, la pobreza extrema, la corrupción, el cambio climático, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 y las graves condiciones económicas[54]. La estrategia reconoce que las organizaciones criminales transnacionales se aprovechan de los flujos migratorios para explotar a migrantes vulnerables como parte de una empresa criminal multimillonaria[54]. Al tiempo que refuerza la seguridad en las fronteras aéreas, terrestres y marítimas para prevenir la entrada ilegal, el DHS trabaja simultáneamente para agilizar el comercio y los viajes legales a través de diversos programas de la agencia[54].

La tercera misión abarca la administración del sistema nacional de inmigración, mediante la cual el DHS busca hacer cumplir las leyes de inmigración de manera eficaz y humana, a la vez que proporciona beneficios migratorios a los solicitantes elegibles[54]. La estrategia reconoce que el sistema legal de inmigración está obsoleto y presenta deficiencias, lo que genera desafíos tanto para la aplicación de la ley de inmigración como para la prestación de servicios migratorios[54]. Esta misión afecta directamente la labor del USCIS en el procesamiento de tarjetas de residencia, permisos de trabajo, solicitudes de naturalización y beneficios humanitarios como el asilo.

La cuarta misión aborda la necesidad de proteger el ciberespacio y la infraestructura crítica, mientras el DHS continúa

Colaborar con socios del gobierno y del sector privado para fortalecer la seguridad y la resiliencia de la infraestructura crítica y los sistemas federales de tecnología de la información para la población civil[54]. Los objetivos de esta misión incluyen evaluar y contrarrestar las amenazas cibernéticas en evolución, los riesgos de las tecnologías emergentes y el cibercrimen[54]. La estrategia destaca la necesidad de identificar y mitigar los principales riesgos de las tecnologías emergentes, en particular los riesgos de la computación cuántica, en preparación para futuras amenazas a los métodos de cifrado existentes[54].

La quinta misión consiste en construir una nación resiliente y responder a incidentes, reconociendo que las perturbaciones causadas por enfermedades pandémicas y el cambio climático han dado un nuevo impulso a la construcción de resiliencia contra todo tipo de peligros y al desarrollo de nuevos enfoques para prepararse, prevenir, protegerse, mitigar y responder o recuperarse de eventos naturales y provocados por el hombre[54]. Los objetivos del DHS dentro de esta área de misión incluyen desarrollar una capacidad de respuesta sólida que se ajuste a la naturaleza de los incidentes, preparar a todo el personal del DHS para ejecutar capacidades de respuesta a incidentes y proporcionar a las comunidades acceso a recursos que apoyen la recuperación después de desastres[54].

La sexta misión consiste en combatir los delitos de explotación y proteger a las víctimas, con el objetivo de lograr la capacidad de identificar dichos delitos y proteger a las víctimas mediante una mayor educación, tecnología forense digital, servicios de apoyo y alianzas con socios federales, estatales, locales, tribales, territoriales, internacionales y del sector privado[54]. El DHS reconoce que el aumento de los delitos de explotación, incluidos la explotación y el abuso sexual infantil en línea, la trata de personas y la explotación laboral, amenazan las fronteras físicas y virtuales de Estados Unidos, los sistemas de inmigración y aduanas, y la seguridad nacional[54].

Funciones relacionadas con la inmigración y el contexto del norte de California

Para los abogados de inmigración en el norte de California y en todo Estados Unidos, comprender las operaciones relacionadas con la inmigración del DHS resulta esencial para una representación eficaz de sus clientes. La intersección de las funciones de inmigración del DHS con las protecciones de la ley estatal bajo los códigos de California ha creado un entorno legal único en el norte de California[13]. La CBP y el ICE hacen cumplir la ley federal de inmigración, resuelven las decisiones de entrada y deportación y llevan a cabo operaciones de control, mientras que el USCIS administra los beneficios de inmigración[18] [21]. Estas tres agencias operan con jurisdicciones distintas pero superpuestas, lo que hace necesario que los abogados de inmigración comprendan los patrones operativos de cada agencia, los criterios de toma de decisiones y su interacción con las protecciones de la ley estatal.

El Tribunal de Inmigración de San Francisco, operado por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), que forma parte del Departamento de Justicia y no del DHS, tramita todos los casos de deportación en el Distrito Norte de California y partes del Distrito Central[21]. La Oficina de Asilo de San Francisco, operada por el USCIS, realiza entrevistas iniciales para solicitudes de asilo y protección humanitaria en la región[35]. Los jueces de inmigración de San Francisco han desarrollado preferencias procesales y patrones de decisión propios que difieren de los tribunales de inmigración de otros circuitos, por lo que el conocimiento de la práctica local es esencial para una representación eficaz. A principios de 2026, el Distrito Norte de California seguía sujeto a la jurisprudencia del Noveno Circuito, que históricamente ha brindado mayor protección a los solicitantes de asilo y otras poblaciones vulnerables en comparación con otros circuitos, como el Quinto o el Undécimo.

El panorama de la práctica migratoria en el norte de California refleja la demografía única de la región, con una población sustancial proveniente de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) que huye de la violencia de pandillas, la persecución y las crisis humanitarias; una importante base de clientes mexicanos y mexicoamericanos; poblaciones concentradas de trabajadores tecnológicos que buscan visas H-1B; y poblaciones sustanciales protegidas por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y el Estatus de Protección Temporal (TPS). La ley estatal de California, en particular las secciones 1203.43 y 1473.7 del Código Penal, que permiten la modificación de antecedentes penales

Las condenas para eliminar las consecuencias migratorias, y el Proyecto de Ley 54 del Senado (la Ley de Valores de California), que restringe la cooperación entre las fuerzas del orden estatales y las autoridades federales de inmigración, crean capas adicionales de protección y consideraciones estratégicas para los clientes inmigrantes en el norte de California que no existen en otras jurisdicciones.

Liderazgo y cambios organizativos recientes

A partir de febrero de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional opera bajo importantes transiciones de liderazgo que reflejan cambios recientes en las administraciones presidenciales y las prioridades estratégicas[8]. El Secretario de Seguridad Nacional, el puesto a nivel de gabinete que dirige todo el departamento, fue nombrado en enero de 2025 y es responsable de la política general del DHS, la asignación presupuestaria y la coordinación con otras agencias federales y socios internacionales[42][43]. El Subsecretario de Seguridad Nacional funge como el segundo funcionario de mayor rango y está autorizado para actuar como Secretario durante la ausencia del Secretario[42][43]. El orden de sucesión para el Secretario, establecido por la Ley de Seguridad Nacional de 2002, incluye al Subsecretario de Administración, el Comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU., el Administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, el Director de CISA y otros altos funcionarios del DHS[42][43].

Los recientes nombramientos de liderazgo en los componentes del DHS reflejan un enfoque en la aplicación de la ley de inmigración y la ciberseguridad como prioridades políticas[8]. El Director del USCIS, nombrado en 2025, aporta una amplia experiencia en adjudicaciones y políticas de inmigración de su servicio anterior durante la administración Trump anterior, con una trayectoria que incluye funciones como Asesor Jurídico Principal en el USCIS, Subprocurador General Adjunto en el Departamento de Justicia y asesor del Subcomité de Inmigración y Seguridad Fronteriza del Comité Judicial de la Cámara de Representantes[8]. El Director Interino del ICE, nombrado en 2025, aporta décadas de experiencia en Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportación, incluyendo funciones de liderazgo supervisando las oficinas de campo del ICE y las operaciones fronterizas[8]. El Comisionado de la CBP ha sido anunciado con una trayectoria en operaciones de aplicación de la ley y seguridad fronteriza[8].

Evaluación de amenazas actuales y prioridades operativas

El Departamento de Seguridad Nacional publicó su Evaluación de Amenazas para la Seguridad Nacional de 2025 a principios de ese año, la cual continúa guiando las prioridades operativas y la asignación de recursos en todo el departamento[23][25]. La evaluación identifica un conjunto complejo de amenazas a la seguridad pública, la seguridad fronteriza, la infraestructura crítica y la economía provenientes de extremistas violentos, organizaciones criminales transnacionales, estados-nación adversarios y actores cibernéticos maliciosos, y estas diversas amenazas a veces se acumulan entre sí de maneras inesperadas y generan costosas interrupciones en la economía de los Estados Unidos[25].

En cuanto a la seguridad pública, la evaluación del DHS concluye que el entorno de amenaza terrorista en el país sigue siendo alto[25]. El departamento expresa especial preocupación por una confluencia de factores, incluidas las respuestas de extremistas violentos a los acontecimientos sociopolíticos internos, en particular los relacionados con los ciclos electorales, y los eventos internacionales que los extremistas violentos nacionales y extranjeros probablemente utilizarán para justificar o alentar ataques en el país[25]. La evaluación del DHS reconoce que los delincuentes solitarios y los grupos pequeños siguen representando la mayor amenaza de llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia, mientras que las organizaciones terroristas extranjeras y sus partidarios mantienen la intención permanente de realizar o inspirar ataques en el país[25]. Además, la producción, el tráfico y la venta de drogas ilegales por parte de actores criminales transnacionales y nacionales siguen representando la amenaza más letal para las comunidades en los Estados Unidos, siendo el fentanilo y otros opioides sintéticos las drogas más letales que se trafican al país[25]. La evaluación señala que el DHS espera que el territorio nacional enfrente amenazas a la seguridad pública por parte de actores estatales que utilizan tácticas subversivas en esfuerzos por influir y dividir al público estadounidense y socavar la confianza en las instituciones, con la

La República Popular China se dirige particularmente a las minorías étnicas y religiosas, los disidentes políticos y los periodistas en los Estados Unidos para silenciar y acosar las voces críticas[25].

En lo que respecta a la seguridad fronteriza y migratoria, la evaluación y las operaciones de campo del DHS reflejan un enfoque constante en los patrones de migración irregular, las organizaciones criminales transnacionales y la intersección de la aplicación de la ley en materia de inmigración con preocupaciones más amplias de seguridad pública y seguridad nacional[25]. La evaluación señala que los encuentros con personas incluidas en la lista de vigilancia antiterrorista habían mostrado una tendencia al alza durante varios años, un patrón consistente con el aumento general de los encuentros con migrantes en la frontera suroeste[25].

En cuanto a la seguridad de la infraestructura crítica, la evaluación del DHS concluye que los adversarios nacionales y extranjeros casi con certeza continuarán amenazando la integridad de la infraestructura crítica con ataques cibernéticos y físicos disruptivos y destructivos, en parte porque perciben que atacar estos sectores tendrá impactos en cascada en las industrias y el nivel de vida de los Estados Unidos[25]. La República Popular China, Rusia e Irán se identifican como las amenazas extranjeras más acuciantes para la infraestructura crítica[25]. Lo más preocupante es que el DHS prevé que la República Popular China continúe sus esfuerzos para posicionarse en las redes de los Estados Unidos para posibles ciberataques en caso de conflicto con los Estados Unidos[25]. Es probable que los Estados nación, los ciberactivistas criminales y los delincuentes con motivaciones financieras perfeccionen sus técnicas para interrumpir los servicios de los Estados Unidos o para llevar a cabo espionaje enfocado en obtener acceso a las redes de los Estados Unidos, incluidas las entidades de infraestructura crítica[25].

Presupuesto y asignación de recursos

El presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional para el año fiscal 2025 refleja una inversión significativa en la aplicación de las leyes de inmigración y las operaciones de seguridad fronteriza[4][53][56]. La autorización presupuestaria total del DHS para el año fiscal 2025 se aprobó en aproximadamente \$107.74 mil millones en asignaciones discrecionales netas, con asignaciones adicionales designadas para ayuda en casos de desastre por \$22.51 mil millones y asignaciones designadas para emergencias por \$2.79 mil millones[53]. Los tres componentes más grandes del DHS por asignación presupuestaria son CBP, ICE y FEMA, lo que refleja la priorización del Congreso de la seguridad fronteriza, la aplicación de las leyes de inmigración y la respuesta a desastres[53].

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. recibió \$19.6 mil millones en asignaciones discrecionales netas aprobadas para el año fiscal 2024, manteniendo el mayor presupuesto de un solo componente dentro del DHS[53]. El ICE recibió \$11.8 mil millones en asignaciones discrecionales netas aprobadas para el año fiscal 2024[53]. El presupuesto del ICE incluye no menos de \$5.9 mil millones designados específicamente para operaciones de cumplimiento, detención y deportación, de los cuales no menos de \$3.1 mil millones permanecen disponibles para obligaciones plurianuales, incluyendo la detención y el transporte de menores extranjeros no acompañados[56]. La ley federal exige que el ICE mantenga un nivel de no menos de 50,000 camas de detención, lo que representa un compromiso operativo continuo y una obligación presupuestaria significativos[56].

USCIS, a pesar de operar casi en su totalidad con ingresos provenientes de tarifas, recibió asignaciones para operaciones y apoyo, con una estructura presupuestaria que refleja su mecanismo de financiamiento único en el que casi todos los ingresos provienen de tarifas de usuario pagadas por los solicitantes en lugar de asignaciones del Congreso[53][35]. FEMA recibió \$42.8 mil millones en asignaciones aprobadas para el año fiscal 2024, lo que refleja un aumento en la financiación para operaciones de respuesta y recuperación ante desastres en vista de los frecuentes desastres naturales[53].

Desafíos estratégicos actuales y direcciones futuras

El Departamento de Seguridad Nacional se enfrenta a varios desafíos estratégicos interconectados que dan forma a sus prioridades operativas y a su dirección política a partir de febrero de 2026. El primer gran desafío consiste en equilibrar la aplicación de la ley de inmigración con el procesamiento ordenado de la inmigración legal, una tensión constante dentro del sistema de inmigración[54]. El DHS reconoce que el sistema de inmigración legal está obsoleto y presenta deficiencias, lo que genera retrasos en el procesamiento de peticiones basadas en lazos familiares, patrocinios laborales y solicitudes humanitarias.

protecciones que pueden retrasar el procesamiento durante meses o años[54]. Los profesionales de inmigración observan que los tiempos de procesamiento del USCIS para varias solicitudes de beneficios de inmigración, incluidos el Formulario I-539 (Solicitud para extender/cambiar el estatus de no inmigrante), el Formulario I-864 (Declaración jurada de apoyo), el Formulario I-693 (Informe de examen médico y registro de vacunación) y el Formulario I-765 (Solicitud de autorización de empleo), varían significativamente según el centro de servicio, y el Centro Nacional de Beneficios y el Centro de Servicio de Texas experimentan tiempos de procesamiento promedio más largos que el Centro de Servicio de California[5].

El segundo gran desafío consiste en gestionar la intersección entre el narcotráfico y la aplicación de la ley de inmigración. El DHS informa que las organizaciones criminales transnacionales explotan los patrones migratorios para traficar con drogas ilícitas, en particular fentanilo y opioides sintéticos[25]. El ICE mantiene su enfoque en desarticular estas redes criminales transnacionales, y la agencia lleva a cabo importantes investigaciones criminales sobre el narcotráfico y el tráfico de personas[13].

El tercer desafío principal consiste en contrarrestar la injerencia extranjera y las operaciones de influencia dirigidas a Estados Unidos, en particular los esfuerzos de la República Popular China para llevar a cabo espionaje, interferir en elecciones y atacar a poblaciones vulnerables dentro de Estados Unidos[25][23]. La Evaluación de Amenazas a la Seguridad Nacional de 2025 del DHS identifica esto como una de las amenazas más complejas y persistentes para la seguridad nacional[25].

El cuarto desafío implica fortalecer la postura de ciberseguridad de los sistemas del gobierno federal y la infraestructura crítica, con especial atención a las amenazas emergentes de actores de amenazas persistentes avanzadas afiliados a estados nación[23]. El DHS, a través de CISA, ha realizado inversiones sustanciales en la búsqueda de amenazas, la gestión de vulnerabilidades y las capacidades de respuesta a incidentes[36].

Conclusión

El Departamento de Seguridad Nacional representa una vasta y compleja empresa federal que abarca nueve componentes operativos y numerosas direcciones de apoyo, cada una de las cuales ejecuta misiones distintas pero interconectadas relacionadas con la prevención del terrorismo, la seguridad fronteriza y migratoria, la ciberseguridad, la gestión de emergencias y la aplicación de la ley. Establecido en respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 mediante la Ley de Seguridad Nacional de 2002, el DHS consolidó 22 agencias federales previamente dispares en una estructura organizativa unificada que opera aproximadamente 240 000 empleados federales en todo el país[2][6][43].

Para los profesionales del derecho migratorio en el norte de California y en todo Estados Unidos, el DHS representa el principal mecanismo federal a través del cual se llevan a cabo la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley en materia de inmigración y la adjudicación de beneficios migratorios, por lo que una comprensión integral de su estructura organizativa, componentes operativos, marco de misión y prioridades estratégicas actuales es esencial para una representación eficaz de los clientes.

Los profesionales de inmigración deben reconocer que el DHS opera dentro de un entorno legal y regulatorio complejo que se cruza con las protecciones de la ley estatal, los precedentes del Noveno Circuito y las directrices políticas en constante evolución de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración y el USCIS. Las variaciones regionales en las operaciones del DHS, incluidas las diferencias en los patrones de procesamiento de la CBP en diferentes puertos de entrada, las prioridades de aplicación de la ley y las prácticas de detención del ICE en diferentes oficinas de campo, y los tiempos de procesamiento del USCIS en diferentes centros de servicio, requieren que los abogados mantengan un conocimiento detallado de las prácticas operativas locales. El entorno legal único del norte de California, configurado por las protecciones de la ley estatal de California bajo las secciones 1203.43 y 1473.7 del Código Penal, el Proyecto de Ley del Senado 54 (la Ley de Valores de California) y los estrictos requisitos de descubrimiento de pruebas bajo el Proyecto de Ley de la Asamblea 1352, crea consideraciones estratégicas adicionales que no existen en otras jurisdicciones.

A partir de febrero de 2026, el DHS opera bajo un liderazgo enfocado en intensificar la aplicación de las leyes de inmigración, mejorar la ciberseguridad y llevar a cabo operaciones antiterroristas. La Evaluación de Amenazas Nacionales de 2025 identifica el terrorismo, la migración irregular, el narcotráfico, las ciberamenazas y las operaciones de influencia extranjera como las principales amenazas.

Amenazas primarias a la seguridad nacional. Los profesionales de inmigración deben mantenerse al día con los avances operativos del DHS, las actualizaciones sobre los tiempos de procesamiento, los cambios en las directrices políticas y las transiciones de liderazgo para brindar una representación eficaz a los clientes inmigrantes que navegan por la compleja intersección de la ley federal de inmigración, los requisitos operativos del DHS y las protecciones estatales disponibles en California.